



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO PONENTE
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I.¹, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés

Radicación n°.	05266 31 03 001 2014 00715 01
Proceso.	Ejecutivo
Demandante.	Esperanza Pineda de Toro
Demandadas.	Juliana Velilla Sepúlveda y Catalina Gutiérrez Acevedo
Procedencia.	Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado.
Decisión.	Confirma auto que resolvió objeción y modificó liquidación de crédito
Tema.	Objeciones frente a la actualización de la liquidación del crédito
Rdo. interno.	062-22
Interlocutorio No.	061-23

ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por la parte demandada en contra del auto del 06 de julio de 2022, mediante el cual se resolvió la objeción formulada por dicha parte frente a la liquidación del crédito presentada por la demandante, y se modificó la misma por el juzgado.

ANTECEDENTES

1.- Del trámite. Mediante auto del 15 de diciembre de 2014, el Juzgado de primera instancia libró mandamiento ejecutivo a favor de Esperanza Pineda de Toro y en contra de Juliana Velilla Sepúlveda y Catalina Gutiérrez Acevedo, por los siguientes conceptos (Pág. 144 y 145 del proceso escaneado):

¹ Acto Legislativo 01 de 2021, art. 1º. “La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.”

- Por capital, la suma de \$100.000.000.

- Por los intereses moratorios causados sobre dicho capital, a la tasa máxima legal permitida, desde el 16 de octubre de 2014, hasta el pago total de la obligación.

Notificada la parte demandada de dicha providencia y agotado el término para que ejerciera su derecho de defensa, en silencio absoluto, en proveído del 27 de abril de 2018, se ordenó seguir adelante con la ejecución en la forma dispuesta en el mandamiento ejecutivo, disponiéndose la realización de la liquidación del crédito en la forma establecida en el artículo 446 del Código General del Proceso (Pág. 155 a 157 *ibídem*).

En cumplimiento de lo anterior, la parte demandante, el 18 de mayo de 2018 presentó liquidación del crédito, de la cual se dio traslado secretarial el 21 del mismo mes y año, a la parte demandada, sin que fuera objetada por ésta; sin embargo, mediante providencia del 03 de agosto de 2018, el juzgado la ajustó a los conceptos ordenados y la aprobó con dicha modificación, siendo el saldo final, para el **17 de mayo de 2018**, la suma de **\$53.625.122,75**, de los cuales \$21.325.122,75, correspondían a intereses y \$32.300.000,00 a saldo de capital (Pág. 160 a 164 del proceso escaneado).

El 31 de agosto de 2021, la parte demandante remitió liquidación del crédito, en la que se liquidaron los intereses moratorios causados sobre la suma de \$32.300.000, desde el 17 de enero de 2016, hasta el 31 de agosto de 2021, arrojando por este concepto el monto de \$47.664.983,96, para un total (capital más intereses), de \$79.964.983,96; igualmente, presentó liquidación de intereses sobre el monto de las costas, desde el 09 de mayo de 2018, hasta el 31 de agosto de 2021 (Archivo 04).

Mediante traslado secretarial fijado el 23 de febrero de 2022, se corrió traslado a la parte demandada de la liquidación del crédito antes referenciada (Archivos 07 y 08).

2.- De la objeción a la liquidación del crédito. El 28 de febrero de 2022, el vocero judicial de la parte demandada formuló objeción a la liquidación del

crédito, exponiendo como argumentos los que se consolidan a continuación (Archivo 12):

- No fueron tenidos en cuenta la totalidad de los abonos realizados por la parte demandada al crédito, por lo que procedió a relacionar los mismos, indicando fecha, monto y folio donde reposaba la prueba o en su defecto, que se aportaba con dicho escrito, y que se encontraban comprendidos entre el 17 de octubre de 2014, hasta el 12 de enero de 2016, ascendiendo éstos a la suma total de \$111.310.000.

- Dentro de la liquidación se incluyeron intereses moratorios sobre el monto de las costas, sin que se éstos se hubieran ordenado dentro de la providencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, y sin que se hubiera efectuado requerimiento o constitución en mora respecto del monto fijado por dicho concepto.

- No se consideró por el juzgado, para la fijación del monto de las agencias, que para el dicho momento existían abonos que cubrían en parte la obligación ejecutada, por lo que, conforme al Acuerdo PSAA16-10554 del Consejo Superior de la Judicatura, el mismo debió señalarse en una suma inferior, sin que se controvirtiera con antelación, en razón de la falta de defensa técnica de la parte resistente, lo que no impedía que el juez como director del proceso velara por las garantías legales y constitucionales de las partes.

3.- El auto apelado. Luego, por providencia del 06 de julio de 2022, el *a quo* despachó desfavorablemente la objeción planteada por la parte demandada en contra de la liquidación presentada por la demandante, por estimar que ésta estaba ajustada a lo dispuesto la orden impartida en el proceso, no obstante, la modificó, pero para actualizarla a la fecha de dicha providencia (Archivo 30).

Cimentó el juzgado de primer grado su decisión, en primer término, en que la liquidación de crédito presentada en el año 2018, no había sido objetada, por lo que el capital había quedado establecido en la suma de \$32.300.000.

No obstante, analizó la disputa surgida a raíz de los abonos realizados por la demandada frente al crédito con posterioridad a la fecha en que fue proferido el mandamiento de pago, así como la forma de imputación de los mismos, coligiendo

que le asistía la razón a la demandante en cuanto al valor total de los mismos y manera como habían sido imputados a la obligación, primero capital y después intereses, sin considerar la suma de \$10.000.000, cancelados el 14 de mayo de 2015, abonados para una obligación que no era objeto de recaudo dentro del proceso.

Así las cosas, bajo dicha consideración estimó que la liquidación presentada por la demandante se ajustaba a lo ordenado en el auto que dispuso seguir con la ejecución, pero la modificó para actualizarla hasta la fecha de providencia, obteniendo como resultado, que se adeudaba por capital la suma de \$32.300.000; por intereses moratorios, \$52.731.897,97, para un total de \$85.031.897,97

4.- La apelación. Oportunamente el vocero judicial de la parte demandada interpuso recurso de apelación, argumentando que con posterioridad al mandamiento de pago sus representadas habían efectuados varios abonos a la obligación, los cuales habían sido mal liquidados por la parte demandante, al incurrir en errores actuariales y aritméticos, toda vez que no había tenido en cuenta las tasas de liquidación mensual a la luz de los artículos 1653 y siguientes del Código Civil, y el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999; además, de realizar imputaciones sin consentimiento de las deudora a obligaciones que no eran objeto de la ejecución (Archivo 32)..

Reiteró que las demandadas habían realizado abonos por valor de \$111.310.000, en efectivo a la parte actora, conforme se había acreditado con los recibos expedidos por la misma, los cuales relacionó nuevamente discriminando monto y fecha, para indicar que, realizando la liquidación del crédito desde el mandamiento ejecutivo, hasta la presentación del aludido recurso, con la imputación de los citados abonos, la suma adeudada por capital ascendía a \$11.599.781,14 y por intereses moratorios a \$19.462.466,20, para un total de \$31.062.227,34.

Agregó, además que, aun acogiendo la teoría relacionada con el abono efectuado el 14 de mayo de 2015, con relación a que solo \$50.000.000, estaban destinados a imputarse a la obligación ejecutada, los valores de conceptos antes referenciados serían menores a los indicados por el juzgado, pues se adeudaría

por capital \$23.434.517,74 y por intereses moratorios \$39.319.107,41, para un total de \$62.753.625,15.

Por tanto, adujo que se había realizado una indebida valoración de las pruebas de los abonos, pues no se había considerado que las mismas no estaban suscritas por las demandadas, de donde se pudiera colegir su voluntad o intención de la forma de imputación de los mismos, pues la pretensión de las mismas siempre había sido destinar dichos abonos al pago de la obligación hipotecaria.

Precisó que, con la objeción que se estaba formulando, no se estaban reviviendo etapas procesales, sino ejerciendo el derecho de contradicción y defensa y solicitándosele al juez que realizara un control de legalidad sobre la forma de imputación de los abonos dentro del proceso, actuación que se encontraba dentro del término legal; y que, si bien, el numeral 4º del artículo 446 del Código General del Proceso, establecía que para actualizar el crédito se debía tomar como base la liquidación que estuviera en firme, en este caso, aplicar dicha preceptiva, atentaría frente a lo contemplado en el artículo 11 del mismo compendio, por no dársele el reconocimiento efectivo al derecho sustancial, simplemente por una falta de defensa técnica de las demandadas en el curso del proceso.

Adujo que, la demandante pretendía declarar dentro del proceso un rubro respecto del cual no se había librado mandamiento de pago, por no hacer parte del contrato de mutuo, sino una suma asignada para liquidar los gastos notariales, por lo que no se comprendía la razón por la cual, en esta etapa de proceso se requería reconocer ese valor, máxime cuando no podía hacerse el reconocimiento crediticio en el trámite de la liquidación.

CONSIDERACIONES

1.- De la liquidación del crédito. Se impone su realización en el auto que ordena seguir adelante la ejecución o, en su defecto en la sentencia que resuelva las excepciones propuestas, en los casos en que la obligación cuyo cumplimiento se pretende consiste en pagar una suma determinada de dinero, sea que se planteé como principal o como subsidiaria y debe ser efectuada de manera independiente a la liquidación de costas.

Las reglas para realizar las liquidaciones de los créditos, se encuentran contempladas en el artículo 446 del Código General del Proceso, que son:

- Cualquiera de las partes puede presentarla, hasta la fecha de su presentación, una vez ejecutoriado el auto que ordena seguir adelante con la ejecución o notificada la sentencia, siempre que no sea totalmente favorable al demandado. Significa que ya no está facultada la secretaría del juzgado para hacerlo, por haber suprimido dicha preceptiva tal posibilidad.

- Una vez presentada dicha liquidación por una de las partes, el despacho le dará traslado secretarial a la contraparte, por el término de tres (3) días (artículo 110 del C.G.P.), dentro del cual podrá formular objeciones, acompañando liquidación alternativa que precise los errores advertidos, so pena de rechazo.

- Vencido el referido traslado, el juez dictara auto en el que decida si aprueba o modifica la liquidación, decisión que será apelable en los casos que se resuelva una objeción o se altere de manera oficiosa la aportada.

- Para la actualización de la liquidación de crédito, se seguirá el mismo procedimiento, pero debe tomarse como base de la liquidación que ya haya sido aprobada.

2.- De la ejecutoria de las providencias judiciales. Alude a la firmeza o consolidación de una decisión, que ocurre cuando la misma no es susceptible de recurso, o se ha vencido el término legalmente establecido para formularlos, o se deciden los que se hayan oportuna y debidamente formulados.

De esta manera, cuando una decisión judicial queda ejecutoriada, se convierte en ley para el proceso y, por ende, no puede ser desconocida por el juez cognoscente, ni por las partes intervinientes en el mismo; no obstante, es factible que, con posterioridad a dicha consecuencia, pueda ser invalidada ante la declaratoria de una nulidad o, porque al momento de emitirse la respectiva sentencia, tratándose de una decisión adoptada mediante auto, se reconsidere lo definido en éste.

A tono con lo anterior, en SC2776 de 2018, exp.: 2016-01535-00, la Corte tuvo la oportunidad de memorar:

“Tradicionalmente se ha entendido que la sentencia se encuentra ejecutoriada cuando se hubiere proferido en procesos de única instancia, o cuando no sea viable la interposición de algún recurso, o cuando, resultando procedente la impugnación, ésta no se hubiese presentado, o cuando la presentada se hubiera resuelto, aunque vale la pena agregar que cuando se hace referencia a la posibilidad de abrir paso a una segunda instancia, debe incluirse la consulta, desde luego en la medida que ese grado jurisdiccional aplique en la situación concreta, lo cual es cada vez más reducido.

Ahora, cuando se trata de la ejecutoria de providencias de segundo grado, es claro que de no proceder más recursos, su ejecutoria se predica una vez notificado el proveído y finiquitado el término previsto en la norma, que puede ser usado, valga recordarlo, para solicitar la corrección, la aclaración o la complementación del veredicto, caso en el cual la ejecutoria aplica una vez emitida la decisión correspondiente.

En todo caso, no sobra mencionar que el evento de procedencia de una impugnación, no propuesta o ya resuelta, hace referencia a los recursos ordinarios e incluso también a la casación; pues, si bien, los recursos extraordinarios teóricamente proceden contra sentencias ejecutoriadas, como regla general, el recurso de casación, de proceder, normativamente no se circunscribe al ataque de sentencias ejecutoriadas, cual brota de consultar el derogado artículo 366 del Código de Procedimiento Civil e igualmente el 334 del Código General del Proceso. De ese modo, la ejecutoria se presentaría cuando no procede la casación o cuando, de proceder, no se interpone o se resuelve”.

Lo anterior, en aras de garantizar a quienes acuden a la jurisdicción de la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso que debe operar para todas partes intervinientes en un trámite, es decir, de que los asuntos decididos dentro de un trámite, no serán objeto de un nuevo debate y en razón de ello se mantendrán, salvo las excepciones legalmente establecidas, sin modificaciones, y previo agotamiento de las oportunidades procesales que hayan permitido su contradicción.

Es precisamente por esta razón que el legislador en el artículo 118 del Código General del Proceso plantea el respeto de las oportunidades y términos procesales, en todos los actos que se adelanten dentro del proceso, señalando expresamente que los mismos son **perentorios e improrrogables** y que el operador jurídico debe cumplir de manera estricta con los términos que señale dicho Código para la realización de cualquier acto, pues su inobservancia tendrá

los efectos previstos en el mismo, sin perjuicios de otras consecuencias establecidas para cada caso en concreto.

3.- Caso concreto. Objetó la parte demandada la liquidación del crédito presentada por la parte demandante, considerando que la misma no sólo imputó de manera inadecuada los abonos, al no considerarse la totalidad de los valores que por dicho concepto se habían entregado directamente a la acreedora, las fechas y la forma como debía realizarse; sino que, además, no lo hizo considerando las tasas de interés que se establecen como máximas, desconociendo el procedimiento como debe realizarse dicha liquidación, lo que había conllevado a que el valor arrojado resultara superior al que realmente se adeudaba para el momento en que fue realizada.

Sin embargo, advierte esta Corporación que los abonos aducidos y los cuestionamientos que frente a la imputación de los mismos se aduce, fueron realizados entre octubre de 2014 y enero 2016, por lo que su imputación operó en la liquidación presentada por la parte demandante el 18 de mayo de 2018, aprobada mediante auto del 03 de agosto del mismo año, previo traslado y ajuste realizado por el Juzgado, adquiriendo por ende, firmeza la misma, en la que se estableció que luego de imputar dichos abonos el capital ascendía la suma de \$32.300.000.

Por tanto, cualquier discusión relacionada con dicho aspecto, resulta extemporáneo; pues, debió efectuarse dentro del término del traslado de la primera liquidación presentada por la parte demandante, esto es, el otorgado mediante traslado secretarial fijado el 21 de mayo de 2018, no que no se hizo, por lo que, al tenor de lo establecido en el numeral 4° del artículo 446 del Código General del Proceso, debía tomarse como base para la actualización de aquella liquidación, esto es, para que ahora se objeta, el valor arrojado por la misma como efectivamente se hizo.

Ahora, no resulta admisible el argumento aducido por el recurrente en cuanto a la posibilidad de cuestionar aspectos que debieron plantearse dentro del término del traslado de la liquidación inicial, ante la imposibilidad de hacerlo la parte demandada por falta de una defensa técnica, pues esto es una carga que corresponde a cada una de las partes y, por ende, las consecuencias que conllevan la ausencia de su cumplimiento, deben ser asumidas por las mismas.

El respeto de los términos y oportunidades procesales, no sólo garantizan el debido proceso de la parte a favor de quien corren, para hacer efectivo su derecho a la defensa y contradicción, sino también, de la parte contraria, para darle certeza sobre la firmeza de las decisiones que no hayan sido cuestionadas, lo que, a su vez, se encuentra en consonancia con el principio de la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad de las partes.

En cuanto al control de legalidad por el juez como director del proceso, que se aduce igualmente por la parte demandada, para soportar la objeción que hace con relación a aspectos que fueron definidos en la liquidación anterior, debe señalarse que, de la modificación realizada en su momento por el funcionario cognoscente, para ajustarla a lo ordenado en el auto que dispuso seguir adelante con la ejecución, como se indica en el auto que aprobó dicha liquidación, puede evidenciarse el efectivo ejercicio de dicho control, por lo que tampoco este argumento confiere al recurrente cuestionar aspectos que, como se indicó, ya adquirieron firmeza.

Finalmente, en cuanto a la forma como fueron liquidados los intereses moratorios, tenemos que, si bien el juzgado de primera instancia alude a que revisada la liquidación se encuentra ajustada a derecho, al verificarse la tasa aplicada para la liquidación de dichos intereses, a partir del 18 de mayo de 2018, que es los que no fueron liquidados con anterioridad y por ende, sobre los cuales no recae la firmeza de la aprobación de la liquidación inicialmente presentada, tenemos que, entre mayo y diciembre de 2018, existen algunas tasas que no se encuentran conforme al interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, y por tanto, la tasa de una media veces (máxima legal permitida), no es la correcta; sin embargo, se evidencia que en razón de que la mayoría fue liquidada con una tasa inferior a la que correspondería, de ajustarse en esta instancia, implicaría un aumento en los intereses, decisión que le sería desfavorable, sin que pueda esta Corporación reformar en peor del único apelante.

En consecuencia, se confirmará la decisión apelada y se condenará en costas al recurrente.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, **CONFIRMA** el auto proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, el 06 de julio de 2022, dentro del proceso Ejecutivo instaurado por Esperanza Pineda de Toro en contra Juliana Velilla Sepúlveda y Catalina Gutiérrez Acevedo.

Se condena en costas a la parte demandada, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Juzgado de primera instancia. Como agencias en derecho se fija la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, esto es, UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS M.L. (\$1.160.000), acorde con lo establecido en el artículo 6°, numeral 1.12.1 del Acuerdo 1887 de 2003, modificado por el Acuerdo 2222 del mismo año.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, reading "MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO". The signature is stylized, with the first letters of each word being capitalized and prominent.

MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Magistrado

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022